

El Salvador proceso

informativo semanal

año 12
número 492

octubre 23
1991

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- Los retos de la reconciliación
- Sigue la guerra, a pesar de los Acuerdos de Nueva York
- Dilemas en torno al crecimiento económico
- El estado de la negociación tras la última ronda de México
- Carta del Parlamento Británico al Congreso de Estados Unidos sobre la ayuda militar a El Salvador

Los retos de la reconciliación

A medida que las negociaciones marchan hacia el momento del cese de fuego definitivo y el inicio de la reconstrucción y reconciliación, va tornándose más perentorio afrontar y asumir las nuevas formas de debatir y resolver los problemas del país, bajo la realidad de paz y vigencia de una incipiente institucionalidad democrática. La Iglesia, por medio del vicario de la Arquidiócesis, ha lanzado un urgente llamado al cambio de actitudes, señalando que la paz no vendrá firmada de México si no es construida y asumida en El Salvador.

La preocupación no es nada gratuita. Si sólo mediante poderosas presiones, nacionales e internacionales, se ha convenido en realizar los más urgentes y necesarios cambios institucionales y constitucionales, debe concluirse que las poderosas fuerzas que los han resistido no se avendrán de buena gana a conducirse dentro del nuevo orden social y constitucional que se esboza en la negociación. Si el gobierno sigue considerando como un puro propósito desestabilizador y subversivo la protesta laboral desencadenada por la crítica situación económica, debe suponerse que una vez finalizado el conflicto proseguirá inculcando a los insurgentes de la efervescencia social y de mala fe en el proceso de pacificación.

Los problemas del país y de la reconstrucción son complejos e ingentes y por lo mismo propicios a sostener y fomentar los antagonismos. Y los antecedentes e inercia impuesta por más de una década de guerra no favorecen la mejor de las disposiciones para afrontarlos. Por lo pronto, representaría un notorio avance que el gobierno supiera reconocer que reconciliación nacional no supone el fin de toda confrontación. La naturaleza misma de la democracia presupone y requiere de la confrontación y competencia de diversos proyectos de economía y de sociedad, y sobre ello el gobierno ha desarrollado una muy mala práctica, al combatir y asociar toda oposición y disidencia con fines y proyectos antidemocráticos.

Es lógico y comprensible que durante el período de guerra un gobierno responsable hubiera podido verse atrapado en la difícil contradicción de animar y legitimar una fuerte oposición y por el otro lado luchar por consolidarse y legitimarse en el poder. Pero una vez superada la lucha armada, debe anteponerse y privilegiarse el interés de la sana confrontación y la apertura a la máxima pluralidad de iniciativas y cuestionamientos, aun a costa de sustanciales concesiones sobre el propio proyecto. Sobre esto al gobierno se le plantea el reto de realizar un extraordinario esfuerzo para romper con la cómoda y antidemocrática inercia de ilegítimos excesos con que ha marginado y atacado a sus

críticos, escudado en una defensa estridente y caduca de la presunta legalidad.

Del lado de la oposición y de las mayorías populares, las desconfianzas y los temores a ser engañadas o marginadas por el gobierno no desaparecerán por la firma de un acuerdo, siendo más proclives a tomar por mala fe o voluntad de engaño lo que pudieran ser reales limitaciones que afronta el gobierno; limitaciones que efectivamente hay y que como tales habría que reconocer. De poco provecho para la reconstrucción y reconciliación nacional sería el permanecer en esa extrema e irreconciliable polaridad.

No obstante, los necesarios cambios de actitud que se piden a todos los sectores del país no pueden fundamentarse en disposiciones psicologistas promovidas por campañas propagandísticas del "nuevo salvadoreño" y similares. Los verdaderos y profundos cambios de actitud se fundan en difíciles procesos que se encauzan y apoyan en instrumentos concretos y operativos que viabilizan la transición y la transformación de la sociedad y sus estructuras. De ahí la enorme importancia y responsabilidad que recae en el eficaz funcionamiento de todas las instancias creadas en los Acuerdos de Nueva York, entre ellos el foro de concertación económico-social, el cual, estando en principio orientado a debatir los problemas socio-económicos del país, debe ante todo ser restaurador o generador de confianza y de cambio de actitud entre los diversos sectores sociales. Por lo mismo, las partes han de ser muy cuidadosas a la hora de decidir y definir sobre sus integrantes, atribuciones y mecanismos.

La fracasada experiencia de la tripartita —gobierno-empresarios-trabajadores—, que configuró el fallido intento de concertación el año anterior, debe ser aprovechada y superada en el difícil momento de la reconstrucción. Para ello debería quedar suficientemente explícito sobre qué y hasta dónde tendrá poder de decisión dicho foro. Asimismo, debe asegurarse la participación de la más amplia, diversa y operativa representación social, sin descuidar el dotarlo de los suficientes poderes decisorios que vuelvan imperioso su mejor funcionamiento. Por lo pronto, los desembolsos de toda la ayuda internacional que vinieren para la reconstrucción y consolidación de la paz deberían estar sujetos a la previa y consensuada aprobación de los proyectos por parte del foro. Construir proyectos de común acuerdo entre los distintos sectores sociales, junto al gobierno, constituirá el mejor modo de generar confianza y consolidar la paz, con todo lo problemático que esto pueda resultar a la hora de las proposiciones.

Sanar las heridas sociales y edificar la comprensión y la solidaridad es una tarea imperativa, más urgente e importante para el país que conseguir que el gobierno reivindique y haga valer su "legitimidad" para llevar adelante el proyecto político que propuso durante la contienda

electoral", como reza uno de los objetivos prioritarios del plan de reconstrucción gubernamental. No se trata de negarle ese derecho apriorísticamente, ni tampoco de sugerir que sea necesariamente cuestionado. Es que promover y consolidar la reconciliación nacional en el crítico período de transición requiere de quien lo conduce el máximo de flexibilidad y de independencia de cualesquiera otros compromisos o intereses, por legítimos que sean. Si en esta coyuntura el gobierno no entiende y asume su misión como una tarea extraordinaria que le demanda sacrificios por encima de su ideología y opciones partidistas, los esperados cambios de actitudes no llegarán, mientras que la confrontación se extenderá incontenible, haciendo peligrar la estabilidad de la paz conseguida a tan alto sacrificio.

Por otra parte, siendo absolutamente insuficiente y deliciente como "plan de recuperación económica y social", el mismo borrador del referido proyecto gubernamental se queda bastante corto en ideal democratizador y reconciliador, cuando pretende limitar la participación de la comunidad a la elección de proyectos locales —los conocidos proyectos y propósitos de municipalidades en acción—. Puede y debe haber mayor participación y fiscalización de la comunidad sobre los gobiernos municipales, pero en modo alguno eso debe excluir el control social sobre las decisiones de trascendencia nacional, y menos cuando importa tanto actuar con el máximo de transparencia y apertura. Es políticamente desacertado y preocupante el pretender reducir y confundir las ingentes y complejas necesidades de la reconciliación con los fines y políticas de la descentralización estatal que se han propuesto el gobierno y AID.

Por lo demás, la organización social en los años de guerra ha alcanzado suficiente complejidad y especialización como para aspirar a contribuir e incidir en la política nacional, y un plan de reconstrucción nacional que ignore esta realidad y desperdicie las capacidades adquiridas sería antihistórico y confrontativo más que reconciliador. Lo que sí debe buscarse, y es indispensable, es la ordenación y optimización de la participación popular, no la marginación y destrucción de la organización social existente, por mucho que no sea adpta al partido en el poder. A este fin también puede y debe contribuir el foro de concertación económico-social.

Los cambios de actitud, pues, también son potenciados por la regeneración y creación de nuevos instrumentos de participación y el foro bien podría ser incoación de esa tercera fuerza institucionalizada que concibió y promovió el padre Ellacuría, como freno y contrapeso a los excesos en que tan fácilmente incurren las fuerzas políticas del país, tanto las de derecha como las de izquierda. Al final, si todo se hace en favor del pueblo, no se tendrá inconvenientes en depositar en éste una mayor y más directa cuota de poder.

Sigue la guerra, a pesar de los Acuerdos de Nueva York

El azaroso periplo para procurar una solución política al conflicto salvadoreño aún no toca tierra firme. Los recientes acuerdos de Nueva York constituyen, sin duda, el marco primordial para conducir el proceso negociador hacia una definitiva pacificación y reconciliación nacional. Su concreción efectiva, no obstante, todavía deberá superar difíciles obstáculos. Mientras tanto, la actividad militar ha continuado impulsando sus dinamos de destrucción. En este sentido, octubre ha sido otro mes más de diálogos y de guerra. Durante el encuentro en ciudad de México, sostenido a mediados del mes por las comisiones negociadoras, las partes aún no lograron cristalizar acuerdos específicos para alcanzar un cese de hostilidades. No obstante, ambas partes han externado su optimismo por el avance registrado por el proceso negociador. Paradójicamente, esto se ha conseguido en el marco de una intensificación de las acciones bélicas ofensivas tanto por parte del FMLN como de la Fuerza Armada.

La guerra a comienzos de octubre

El mes de octubre se inició mostrando un importante repunte de la actividad ofensiva rebelde en sus diversas modalidades, al tiempo que el ejército mantuvo inalterables sus operativos de presión en las zonas tradicionalmente conflictivas del país.

Durante los primeros diez días del mes, los reportes del COPREFA registraron 27 combates de encuentro y 16 ataques rebeldes en 11 departamentos del país. Tal accionar bélico ocasionó 60 bajas (21 muertos y 39 heridos) entre los efectivos de la Fuerza Armada y 61 bajas (23 muertos y 38 heridos)

entre los combatientes del FMLN.

La actividad militar se distribuyó, en orden de intensidad, de la manera siguiente: Cuscatlán, 7 combates de encuentro y 2 ataques rebeldes; Morazán y Chalatenango, 6 combates en cada uno de ellos; San Salvador, 1 combate y 5 ataques; La Libertad, 4 ataques; Usulután, 4 combates y 2 ataques; San Vicente, 2 ataques; La Paz, 1 ataque; y, finalmente, en Cabañas, San Miguel y La Unión, un combate en cada departamento.

La Fuerza Armada ha desplegado fuertes operativos de rastreo y desalojo en el norte y centro del país. Los principales combates de encuentro que tal actividad de contrainsurgencia ha propiciado durante el período mencionado se han concentrado en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango, Morazán y Usulután.

En Cuscatlán, se escenificaron fuertes combates entre columnas rebeldes y efectivos de los batallones de paracaidistas y Libertadores, así como de la Primera Brigada de Infantería y del Destacamento Militar Número 5 en los cantones Tenango y El Zapote, en el caserío Los Cáceres y en la quebrada Mico Bravo, todos estos lugares pertenecientes a la jurisdicción de Suchitoto. Otros combates tuvieron lugar en el caserío La Aldea, de San José Guayabal, en el cantón Copalchán y en la quebrada El Copinol, de Tenancingo. En este departamento, además, el ejército acompañó la incursión de sus efectivos en los bastiones rebeldes con un intenso bombardeo aéreo concentrado en el área norte del cerro de Guazapa. El fuego aéreo estuvo a cargo de los habituales aviones A-37 y de helicópteros artillados del tipo UH.

En Chalatenango, efectivos de la Cuarta

Brigada de Infantería sostuvieron choques armados en la quebrada Las Cañas y en el cantón Estanzuelas, de la jurisdicción de Tejutla; en el caserío El Chaparrón y en las proximidades del cerro Grande de Sunza del poblado de Agua Caliente; y en la quebrada Las Pilas, en los contornos de La Palma.

En Morazán, los enfrentamientos de efectivos de los batallones Belloso y Bracamonte con los combatientes del FMLN se concentraron en el área de San Fernando; en el caserío Santa Apolonia, de Meanquera; en el caserío La Laguna, de El Rosario; y en el área general de Perquín.

En Usulután, las unidades de la Sexta Brigada de Infantería y del batallón Arce combatieron con fuerzas insurgentes en el cantón Playitas, de Santiago de María; en la finca Santa Josefina, de San Francisco Javier; y en la quebrada El Barranco y en el cantón El Llano del Chilamate, ambos lugares localizados en la jurisdicción de San Buenaventura.

La principal novedad en la marcha de la guerra en el inicio del mes ha sido el relanzamiento de la actividad ofensiva insurgente, la cual había mantenido un bajo perfil en las semanas anteriores. En esta línea de acciones, el FMLN ha realizado emboscadas a patrullas del ejército y ha continuado, asimismo, estableciendo puestos de control en diversas carreteras del país. En San Salvador y sus alrededores, los comandos urbanos han reiniciado sus operativos de asalto en el marco de una nueva campaña ofensiva denominada "Contra la represión, fuera cuarteles de la ciudad". Tal campaña se inició el 3 de octubre y, según voceros rebeldes, está dirigida contra los cuerpos de seguridad "para castigarlos por la represión y los escuadrones de la muerte". Al parecer, el recrudecimiento de las acciones militares del FMLN en San Salvador responde al esfuerzo rebelde para obligar al ejército a dedicar un importante número de sus efectivos a

tareas de protección, con la consecuente disminución de la presión bélica en la retaguardia estratégica insurgente.

Las acciones ofensivas rebeldes más relevantes del período, en consecuencia, han estado concentradas en San Salvador y sus zonas aledañas. Tales acciones han ido **in crescendo** a medida que ha avanzado el mes. El 4 de octubre, comandos urbanos atacaron una posición avanzada de CE-TIPOL, cerca del balneario Los Chorros, en el cantón Los Cedros, de la jurisdicción de Nueva San Salvador. La acción generó un enfrentamiento que se prolongó por un lapso de 4 horas y provocó un fuerte congestionamiento vehicular sobre la carretera Panamericana. Dos soldados resultaron heridos. El 9 de octubre, un vehículo que transportaba efectivos de la Primera Brigada de Infantería fue emboscado por unidades rebeldes en las proximidades de Nejapa, en la periferia norte de San Salvador. En la acción murieron 6 soldados y otros 14 resultaron heridos. Ese mismo día, fuerzas rebeldes ocuparon la colonia San José Las Flores, siempre en el sector norte de la periferia capitalina, en la jurisdicción de Apopa. Efectivos de la Primera Brigada acudieron al lugar para desalojar a los rebeldes, entablándose combates por espacio de 5 horas. Según el COPREFA, 3 rebeldes habrían muerto y 3 efectivos habrían sido heridos durante los enfrentamientos.

En San Salvador, los comandos urbanos hostigaron varios puestos de vigilancia del ejército, entre ellos el puesto de la Guardia Nacional en la colonia Málaga, en el barrio Santa Anita; un puesto de la Fuerza Aérea en la colonia Cucumacayán; y otro de la Guardia Nacional localizado en la esquina de la 20 avenida norte y 35 calle oriente, en la colonia Atlacatl. En otras acciones menores, los rebeldes incendiaron un autobús y un vehículo particular.

En términos del accionar de sabotaje

contra la infraestructura económica, fuerzas insurgentes incursionaron, el 7 de octubre, en las instalaciones del beneficio de café "El Marquezado", ubicado a sólo 2 kilómetros de Santiago de María (Usulután). Los rebeldes quemaron las bodegas donde estaba almacenada una gran cantidad de sacos de café listos para la exportación.

Actividad bélica posterior

A lo largo de la segunda y tercera semana de octubre, la actividad bélica ha continuado potenciada y dirigida por iniciativa rebelde. Mientras en ciudad de México se ha proseguido con la labor de negociar los términos para poner fin a más de una década de guerra, en el país la actividad militar experimentó un vigoroso repunte. Según el FMLN, el ejército ha continuado realizando un "ilusó" esfuerzo militar extraordinario que no ha conseguido su propósito de inclinar la marcha de la guerra a su favor. En cambio, ha motivado una justificada respuesta ofensiva rebelde, la cual ha elevado los niveles de la confrontación armada.

En el periodo comprendido entre el 11 y el 22 de octubre, los reportes de COPREFA registraron 22 combates de encuentro y 23 ataques rebeldes en 9 departamentos del país. El desgaste de las fuerzas vivas contendientes dejó un saldo de 51 bajas (13 muertos y 38 heridos) entre los efectivos de la Fuerza Armada y de 113 bajas (47 muertos y 66 heridos) entre los combatientes del FMLN. COPREFA aseguró, además, que en diversas acciones militares la Fuerza Armada decomisó al FMLN 13 fusiles de asalto (AK-47 y M-16), 8 cargadores, 4,800 cartuchos, 2 morteros de 81 mm, 57 granadas para ese tipo de morteros, 37 cápsulas detonantes, 1 ametralladora punto 50, 156 cargas impulsoras y 1 lanzacohetes RPG-7.

La actividad militar de dicho período se distribuyó de la manera siguiente: Chalate-

nango, 5 combates de encuentro y 8 ataques rebeldes; San Salvador, 7 ataques; Cuscatlán, 3 combates y 4 ataques; Usulután, 5 combates y 1 ataque; Morazán, 4 combates; San Miguel, 3 combates; San Vicente y La Libertad, 1 combate y 1 ataque, respectivamente; Cabañas, 1 ataque.

Entre las acciones ofensivas del FMLN destacó la toma de la población de Tamanique (La Libertad), el 14 de octubre, por fuerzas del Frente Central "Modesto Ramírez". Los rebeldes controlaron dicha localidad por más de cuatro horas y destruyeron parcialmente las instalaciones de la comandancia local. El 16 de octubre, en una acción simultánea, unidades rebeldes ocuparon varias poblaciones del departamento de Chalatenango, entablando fuertes combates con efectivos de la Cuarta Brigada de Infantería y del Destacamento Militar Número 1. Las poblaciones en que incursionaron las fuerzas insurgentes fueron San Rafael, Dulce Nombre de María, Santa Rita, Agua Caliente, San Ignacio, Concepción Quezaltepeque, San Francisco Morazán y San Miguel de Mercedes. El FMLN aseguró que, en esos combates, ocasionó un total de 50 bajas a la Fuerza Armada; por su parte, COPREFA manifestó que el ejército dio muerte a 23 rebeldes e hirió a 18 más. En la madrugada del día 20, en otra acción simultánea, columnas insurgentes atacaron las instalaciones de las centrales hidroeléctricas "5 de noviembre" y "Cerrón Grande". En la primera, los disparos de mortero hicieron impacto en dos transformadores de alta potencia, causando daños materiales estimados en más de 250 mil colones.

En el área urbana de San Salvador, el accionar de los comandos urbanos mostró una intensidad similar a la desarrollada por el FMLN en las zonas conflictivas del interior del país. Así, el 11 de octubre, los comandos emboscaron a una patrulla de la Policía Nacional cuando se conducía sobre la calle

El Bambú, en Ayuluxtepeque, hiriendo a un efectivo. La noche del 13, atacaron las instalaciones de la subestación de CEL de San Antonio Abad, localizada al norponiente de la colonia Miralvalle, aunque sin ocasionar daños materiales ni bajas a los efectivos que la custodiaban. Ese mismo día, las oficinas de ANTEL en Cuscatancingo fueron destruidas por un poderoso atentado dinamitero. El 18 de octubre, en el sector sur de la capital, en Ciudad Merliot, los comandos urbanos dinamitaron una gasolinera ESSO, ocasionándole daños estimados en medio millón de colones. Finalmente, el 22 de octubre, realizaron un breve hostigamiento contra un puesto de vigilancia del Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA).

Además del ataque a las centrales hidroeléctricas, el accionar de sabotaje contra la red nacional del tendido eléctrico experimentó un notable incremento. Unidades zapadoras rebeldes dinamitaron 22 estructuras eléctricas en los departamentos de Sonsonate (6 postes en el cantón Las Crucitas, de Armenia), San Salvador (2 postes localizados sobre la carretera Troncal del norte a la altura del kilómetro 29), Cabañas (6 postes en las proximidades de Ilobasco) y Usulután (8 postes en el cantón Santa Anila, de Mercedes Umaña). En el mismo marco, 6 líneas de transmisión primaria quedaron temporalmente fuera de servicio, agudizando la crónica crisis del sistema eléctrico nacional. Las líneas saboteadas fueron las de San Martín-Nejapa, San Lorenzo-San Rafael Cedros, San Antonio Abad-Nejapa, Acajutla-San Juan Opico y San Lorenzo-Santiago de María. Por otra parte, en el mismo período, seis autobuses del transporte público y un camión de uso comercial fueron incendiados o destruidos parcialmente por comandos urbanos en diversas acciones de sabotaje al transporte en el área de San Sal-

vador.

En lo que respecta al accionar del ejército durante el período considerado, los principales teatros de los operativos contrainsurgentes se localizaron en los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y Morazán. En Chalatenango, los efectivos del ejército sostuvieron combates de encuentro contra el FMLN en el cantón Candelaria Las Minas (Potonico), en los cerros El Gallinero (Agua Caliente) y Cuatro Pinos (La Laguna), en el caserío La Rastra (Concepción Quezaltepeque) y en el desvío al poblado de Santa Rita. En Cuscatlán, efectivos de la Primera Brigada de Infantería combatieron contra unidades del FMLN en los cerros El Palmo, Cucultitán y La Cruz (Tenancingo) así como en el cantón El Zapote (Suchitoto). En San Miguel, tropas de la Tercera Brigada de Infantería chocaron con columnas rebeldes en el cerro Verde (Lolotique), en las afueras de Ciudad Barrios y en el caserío Los Villalobos (Chinameca). En Usulután, unidades de la Sexta Brigada hicieron lo propio en el cantón San Benito (Mercedes Umaña), en las cercanías de Tecapán, en la quebrada El Cargadero (Ozatlán) y en el cantón Llano del Chilamate (San Buenaventura). Finalmente, en Morazán, efectivos del Destacamento Militar Número 4 sostuvieron combates en los alrededores de Guatajagua, en la quebrada Las Lajas, en el sitio Los Sosa y en el cantón La Joya (Sociedad) y en el caserío Niquidambo (Perquín).

Los principales actores del conflicto salvadoreño coinciden de forma optimista en señalar que los días de la confrontación armada están contados. Sin embargo, únicamente con acciones concretas, que aún no cristalizan, se pondrá fin a la todavía vigente vorágine de violencia y destrucción que aqueja al país.

Dilemas en torno al crecimiento económico

Entre los factores que las autoridades económicas del país consideran explicativos de la desaceleración del proceso inflacionario en los últimos meses se encuentra la relativa estabilidad registrada por el tipo de cambio. Es justo conceder que, en teoría, esta hipótesis es bastante plausible. Estudios econométricos han establecido la relación entre tipo de cambio y tasa inflacionaria: modificaciones en el tipo de cambio provocan cambios significativos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la misma dirección. De ahí que se plantee que, a mayores aumentos en el tipo de cambio, mayores serán también los aumentos en el IPC y, por tanto, en la tasa inflacionaria.

No obstante, en el país ocurre una situación paradójica. Mientras, por un lado, el Banco Central de Reserva (BCR) atribuye a la estabilización del tipo de cambio un importante efecto causal sobre la disminución de la tasa inflacionaria observada durante el presente año, por otro lado señala que, de acuerdo a estimaciones del FMI, el colón ha continuado sobrevaluándose a un ritmo tal que, entre los meses de junio/90 y junio/91 se sobrevaluó en un 4.7%.

Los resultados de esta dinámica, de acuerdo al BCR, son, por una parte, la desaceleración de la tasa inflacionaria —lo cual favorece a los sectores asalariados— y, por otra, la generación de un ambiente desfavorable para el sector exportador. Dados los efectos opuestos que una medida como la devaluación provoca según sea el sector que se examina, interesa resaltar cuál sería la forma en que el gobierno debería proceder para salvar esta situación sin comprometer la búsqueda del desarrollo económico.

La promoción de las exportaciones es un elemento clave para promover una expan-

sión de la producción y del ingreso. Dando por descontado que en el actual contexto una redistribución del ingreso no parece muy probable, las posibilidades de reducir la pobreza se limitan a un paliativo para la satisfacción de las necesidades básicas como producto de la expansión del ingreso, que es lo que, de acuerdo al Banco Mundial, ha demostrado históricamente ser el elemento que mejor promueve el bienestar social.

Así las cosas, pareciera que los beneficios del crecimiento deberán ser distribuidos mediante la intermediación del Estado, el cual deberá promover un ambiente favorable para las empresas y obtener los recursos necesarios para propiciar mejorías en el bienestar social. De momento, el gobierno parece estar fallando en ambos puntos: primero, porque no ha creado un clima favorable para la expansión de las exportaciones; y segundo, porque, aunque haya logrado disminuir el ritmo inflacionario, los niveles del gasto público destinado al bienestar social son insuficientes.

Evolución de algunas variables macroeconómicas

Según fuentes oficiales, durante los últimos meses la tendencia general de la economía ha sido hacia la estabilización, puesto que se ha logrado eliminar el saldo negativo de la balanza de pagos y ha disminuido el crecimiento del IPC.

No obstante ello, la balanza comercial continúa manifestando un comportamiento deficitario. Durante el primer semestre del año, su saldo fue de —354.6 millones de dólares, lo cual implicó un incremento de 51.7% en relación al saldo obtenido para el primer semestre de 1990. Ello es resultado de un incremento de las importaciones y una

resumen semanal

disminución de las exportaciones entre el primer semestre de 1990 y el correspondiente de 1991. De acuerdo a informaciones ofrecidas por el BCR, la fuerte entrada de capital privado, de donaciones y de remesas familiares estaría contribuyendo a reducir el impacto del déficit comercial sobre el saldo de la balanza de pagos.

Por otra parte, la tasa de crecimiento del IPC durante los tres primeros trimestres de 1991 habría disminuido en relación al mismo período de 1990. Así, fuentes oficiales han dado a conocer que la tasa de crecimiento acumulada del IPC ha disminuido de 12.9% a 9.9% mientras que su variación promedio interanual ha bajado de 25.4% a 15.3%.

Las cifras referentes al sector externo y al crecimiento del IPC parecen confirmar la apreciación del BCR en torno a los efectos de la relativa estabilización del tipo de cambio sobre las exportaciones y el IPC. Así se explica el que haya disminuido el crecimiento del IPC y que se haya obtenido un saldo deficitario en la balanza comercial. Es en este punto que al gobierno se le plantea el problema de delimitar cuál será su prioridad: si crear un clima propicio para las empresas exportadoras mediante una devaluación, mantener estable el tipo de cambio para proteger los ingresos reales de las familias, o bien promover a la vez la expansión de las exportaciones y la producción sin olvidar la promoción del bienestar social de la población.

Distribución de los costos del programa económico

En el entendido de que devaluar aceleraría el ritmo inflacionario, a la vez que favorecería a los agentes económicos dedicados a actividades de exportación, la disyuntiva que se plantea consiste en establecer con claridad las prioridades del programa de gobierno.

Pareciera que los beneficios que podría acarrear una medida como la devaluación

son sectorialmente excluyentes: si se beneficia a un sector se perjudica al otro y viceversa. Sin embargo, es posible diseñar estrategias de acompañamiento para medidas que contemplen la devaluación del colón —y en general, para las comprendidas en un programa de ajuste estructural— que permitan mejorar el bienestar social. Ello implica la participación estatal en el área social, generando los medios necesarios para promover mejorías en las condiciones de alimentación, salud, educación, vivienda etc. La experiencia económica ha mostrado que la expansión de la producción y la reducción de la pobreza son más fácilmente inducidas si el gobierno actúa a manera de complemento del mercado y no en contra de sus fuerzas. Sin embargo, también está demostrado que la intervención del Estado es necesaria en áreas en que el mercado no garantiza el bienestar social de la población. En El Salvador, la ausencia de políticas sociales destinadas a promover mejoras reales en las condiciones de vida de la población es uno de los grandes vacíos del programa de gobierno.

La liberación de los recursos destinados a la guerra bien podría encaminarse para este fin. Destinar tales recursos para programas de bienestar social constituye una exigencia no sólo ética y social sino incluso económica. No es difícil mostrar que estos programas requieren de un monto de recursos superior al que el gobierno les ha asignado en su plan de desarrollo social, y ello sin tomar en cuenta las nuevas necesidades que surgirán con la desmovilización de los combatientes de las fuerzas en pugna. Si la actual gestión gubernamental desea promover el desarrollo económico, debería —además de propiciar las condiciones para una expansión del producto— gestionar la obtención y asignación de recursos destinados a promover el bienestar social, asunto que hasta la fecha constituye uno de los puntos más cuestionables de su programa de gobierno.

El estado de la negociación tras la última ronda de México

Entre el 12 y el 22 de octubre, la ciudad de México se convirtió, una vez más, en el escenario en que se llevó a cabo la más reciente jornada del proceso negociador salvadoreño. La realización de esta cita se verificó, por un lado, en el marco positivo del nuevo clima y nuevo ritmo que para tal proceso han significado los acuerdos firmados en Nueva York el pasado 25 de septiembre, bajo la mediación directa del secretario general de la ONU (*Proceso 491*); y, por otro, en el contexto preocupante de un incremento sensible de las acciones armadas en diferentes zonas del país.

En general, aun cuando los diez días de discusiones no lograron arrojar acuerdos públicos mayores y se hizo necesario establecer un receso, entre otras cosas para la realización de consultas; las valoraciones que ambas partes han hecho son positivas, y ello tanto en lo que a los puntos actuales de coincidencia concierne, como en lo referente a las perspectivas que plantean las reuniones próximas. Por lo pronto, las coincidencias fundamentales logradas y los acuerdos sobre temas parciales han pasado a lo que se ha dado en llamar "la congeladora", en espera de acuerdos globales y finales dentro de los cuales éstos adquieran concreción y fisonomía definida. Se ha avanzado con rapidez, aseguró el representante del secretario general, Alvaro de Soto, "pero la regla es que nada está acordado hasta que esté acordado todo".

Permanecen, empero, los señalamientos mutuos sobre la responsabilidad del interlocutor en la dilación o aceleramiento de la adopción de acuerdos concretos y definitivos. Actitud manifiesta de especial manera

en las declaraciones de los personeros del gobierno y la Fuerza Armada que, eludiendo la discusión pública y puntual de la agenda de negociación, se han esforzado por hacer creer que la firma de los acuerdos políticos y de un eventual cese de fuego, depende sin más de la "voluntad política" del FMLN.

A ello apuntan las declaraciones del vicepresidente de la República, Sr. Francisco Merino, quien refiriéndose al incremento de las acciones guerrilleras suscitadas mientras se desarrollaban las negociaciones, ha sostenido que ello se debe a los "conflictos internos en el FMLN, pues hay grupos que siguen optando por la violencia", y que, por ende, la dilación de las acciones armadas depende de los insurgentes. En el mismo sentido se han pronunciado el Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, y el sub-jefe del Estado Mayor y miembro de la comisión negociadora del gobierno, coronel Ernesto Vargas. De acuerdo a Vargas, "si hay voluntad del FMLN, a más tardar el 30 de noviembre deben firmarse los acuerdos de paz". Por su lado, el Ministro Ponce llegó a afirmar incluso, el 21 de octubre, al referirse al estado de las negociaciones y al punto específico del cese de fuego, que el FMLN "no quiere desarmarse y desmovilizarse, quiere seguir siendo grupo guerrillero... no quiere incorporarse a la vida política y civil".

Tales declaraciones, aparte de inoportunas e irresponsables, especialmente por provenir de funcionarios de su rango, deliberadamente distan en mucho de identificar los verdaderos escollos que deberán ser superados en la mesa de negociación. En el estado actual del proceso, afortunadamente las negociaciones se encuentran ya fuera de

alcance de estos sospechosos y poco lúcidos malabarismos políticos reflejo, en parte, de las propias contradicciones que al partido en el gobierno y a la Fuerza Armada les han implicado los acuerdos alcanzados en Nueva York y la etapa con ellos iniciada.

En lo que a la recién concluida jornada de negociaciones en México se refiere, ésta se desarrolló a partir de la instalación de dos mesas de trabajo. Una de ellas, denominada mesa política, que se dedicó a los puntos concernientes al tema de Fuerza Armada; y la otra, la mesa del cese de fuego, que se encargó de los aspectos generales, condiciones políticas y presentación y discusión de proyectos concretos para el cese del enfrentamiento armado.

La mesa del cese de fuego fue la que menos avances mostró; sin embargo, a juicio de la mediación, los documentos presentados por las partes poseen puntos de aproximación que pueden ser la base para futuros acuerdos sustantivos.

Al tercer día de discusiones se generaron importantes diferencias sobre la forma de alcanzar el cese de las hostilidades. El FMLN presentó su posición de acordar un cese de fuego informal como antesala del fin definitivo del enfrentamiento; según el FMLN, con esto se podría lograr "un ambiente de distensión y un clima adecuado para seguir la negociación". La propuesta fue calificada por la delegación gubernamental como inaceptable por salirse de los márgenes de la agenda acordada en Nueva York, y enfatizó la necesidad de discutir el cese de fuego definitivo. El vicepresidente Merino, por su lado, continuando con su costumbre de intervenciones poco afortunadas, acusó al FMLN de querer hacer uso de una "maniobra para ganar tiempo y reabastecerse", imputación que la insurgencia se vio obligada a rechazar inmediatamente.

En contraparte a la propuesta guerrillera, la delegación gubernamental planteó la posibilidad de discutir más bien sobre medidas encaminadas a un desescalamiento del conflicto, para una disminución de la violencia. postura que fue rechazada por el FMLN argumentando que tal desescalamiento no suspendería acciones determinantes en la estrategia militar del ejército y que ello podría facilitar la ocupación de zonas bajo control guerrillero.

De esta suerte, ante la encrucijada que significaron las posturas de las partes en torno a las respectivas propuestas, la mesa dedicó buena parte de la jornada a la determinación de las características y los aspectos conceptuales del cese de fuego definitivo. La parte mediadora, por su lado, si bien reparó en las dificultades que un cese de fuego informal plantea al momento de la verificación, dejó abierta la posibilidad de discutirlo en lo próximo de manera vinculada al tema del cese definitivo de las hostilidades.

La mesa dedicada a los acuerdos políticos trabajó con mayor agilidad. El mismo coronel Vargas aseguró, el 24 de octubre, que de los catorce puntos que contempla el tema Fuerza Armada, sobre ocho "hay concordancia, en cuatro hay aproximaciones sustantivas y en dos sólo aproximaciones". La afinidad de posiciones lograda durante la jornada no se puede subestimar, y ella es un buen signo de la irreversibilidad del proceso negociador y del nuevo ritmo que le imprimió la cita de Nueva York, muy a pesar de los voluntarismos e intereses de quienes históricamente se han opuesto y siguen oponiéndose a la solución negociada.

Ciertamente hay muchos, y muy difíciles, escollos que aún deben ser superados en la mesa de negociación. Por lo pronto, los temas de la depuración y de la Policía Na-

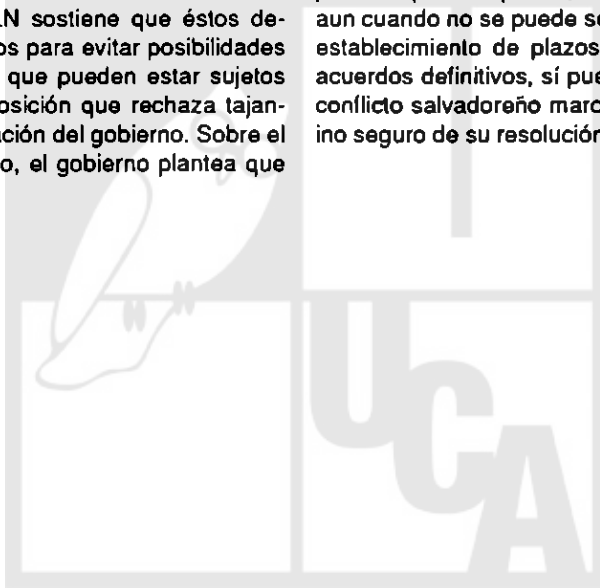
cional Civil (PNC) se han perfilado como los nudos mayores e inmediatos.

En lo que a la PNC respecta, la cuestión se centra en la definición precisa de sus funciones, organización y participación. El punto último es crucial pues en la mayor o menor integración de las partes, especialmente del FMLN, se encuentra en juego la disputa sobre las relaciones de poder existentes.

Por lo que toca al problema de la depuración, los escollos se encuentran en la designación de los miembros civiles de la comisión Ad Hoc, los representantes militares y los miembros del grupo de apoyo de la comisión. Respecto a los miembros de la comisión, el FMLN sostiene que éstos deben ser extranjeros para evitar posibilidades de intimidación a que pueden estar sujetos los nacionales, posición que rechaza tajantemente la delegación del gobierno. Sobre el personal de apoyo, el gobierno plantea que

éstos deben ser militares mientras el FMLN considera deben ser civiles. Finalmente, el FMLN no está de acuerdo en que la designación de los militares ante la comisión se haga sin consulta previa con sus representantes.

Estos son, entre otros, algunos de los escollos a superar en la próxima ronda programada para los primeros días de noviembre. Falta aún por ver cuáles serán los principales retos que plantearán las negociaciones al entrar a la consideración del tema económico-social. La negociación sigue siendo un sendero difícil, pero los resultados obtenidos hasta hoy y las perspectivas compartidas por las partes, son alentadoras; y aun cuando no se puede ser categórico en el establecimiento de plazos para la firma de acuerdos definitivos, sí puede decirse que el conflicto salvadoreño marcha ya por el camino seguro de su resolución negociada.



Carta del Parlamento Británico al Congreso de Estados Unidos sobre la ayuda militar a El Salvador

Transcribimos la misiva que un grupo de 48 parlamentarios británicos, miembros de la Cámara de los Comunes, enviaron el 18 de octubre recién pasado a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos, exponiendo sus preocupaciones sobre la continuación de la ayuda militar norteamericana al ejército salvadoreño, sobre todo por el riesgo de que ésta pueda ser interpretada por los militares salvadoreños como una señal de que pueden seguir violando impunemente los derechos humanos sin que el gobierno de Estados Unidos adopte medidas enérgicas para evitarlo.

Estimados Colegas:

A la luz del debate actual sobre la ayuda militar de Estados Unidos a El Salvador, les escribimos esta carta como miembros del Parlamento Británico para compartir con ustedes algunas de nuestras preocupaciones.

En primer lugar, aplaudimos la forma en que Estados Unidos promovió las conversaciones de paz mediadas por las Naciones Unidas entre el gobierno de El Salvador y el FMLN. El proceso no pudo haber llegado a este punto sin el apoyo de Estados Unidos.

Al igual que el gobierno de Estados Unidos, creemos que la comunidad internacional puede y debe actuar de forma concertada a la hora de tomar acciones para alcanzar la paz, la democracia y el respeto al derecho internacional. Y todos reconocemos la importancia de garantizar que no se envíen señales equivocadas a gobiernos que han sido hasta cierto grado receptivos a la opinión pública pero que todavía tienen bastante camino que andar. Ese sería el resultado de proporcionar recursos ilimitados a fuerzas que se oponen al proceso de transición hacia la democracia y la paz en El Salvador.

A pesar de las indicaciones esperanzadoras que se ven en aquel país, todavía hay razones por las cuales preocuparse. Dado el contexto de una fuerza armada cuya actuación en materia de derechos humanos ha sido tan negativa, es de suma importancia determinar dónde existen esfuerzos para mejorar la situación, y dónde hay quienes parecen empeñarse en conservar los privilegios existentes y, de ser necesario, utilizando los mismos métodos de siempre.

Además del asesinato, de todos conocido, de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta, en 1989, la Fuerza Armada de El Salvador también fue responsable del asesinato de 600 personas en el Río Sumpul en 1980, de 4 religiosas estadounidenses en 1980, de 1,200 personas en El Mozote en 1981, de 70 indígenas en Las Hojas en 1983, y de 10 campesinos en el cantón San Francisco en 1988. Los esfuerzos descarados emprendidos por la Fuerza Armada para obstaculizar el proceso judicial en el caso jesuitas (los cuales han sido comentados por muchos, entre otros su colega Moakley), indican que existe poca voluntad entre oficiales de alta graduación para reconocer el imperio de la ley. Incluso

en semanas recientes, durante el proceso de paz, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL) ha documentado muchos abusos adicionales, incluyendo asesinatos al estilo de los escuadrones de la muerte, ataques injustificados contra poblaciones civiles, amenazas de muerte contra grupos humanitarios y políticos de la oposición, capturas y caleos ilegales, todos en violación de los acuerdos sobre derechos humanos firmados en Costa Rica en julio de 1990.

Por supuesto, nos encontramos preocupados ante las conclusiones expuestas por la ONUSAL en el sentido de que el FMLN también ha violado el acuerdo de Costa Rica al secuestrar a empresarios importantes, y al practicar el reclutamiento forzoso contra campesinos, y nos impactó mucho el asesinato en enero pasado de los dos asesores estadounidenses. Pero seguimos creyendo que una ayuda militar otorgada sin restricciones contribuiría simplemente a una escalada del ciclo trágico de violencia y represalias.

Nos consuela algo el hecho de que el coronel Benavides haya sido condenado por su participación en el asesinato de los jesuitas, lo cual representa un primer rompimiento con la impunidad tradicional que ha caracterizado a los oficiales militares de alta graduación. Pero quisiéramos hacer notar que el representante especial de la ONU, el profesor Pastor Ridruejo, ha expresado su preocupación en el sentido de que los autores intelectuales del crimen no han sido enjuiciados. También concordamos con el congresista Moakley en opinar que los esfuerzos permanentes de la Fuerza Armada para obstaculizar el proceso judicial

indican que algunos de los autores intelectuales de este asesinato han quedado libres para planificar y ejecutar otros crímenes.

En enero de 1990, una misión del grupo de derechos humanos de nuestro parlamento visitó El Salvador. El grupo, con delegados de todos los partidos representados en el parlamento, incluyendo a tres de los abajo firmantes —Peter Archer Q.C. M.P. (Lab), Sir Russell Johnston M.P. (Lib) y Mark Wolfson M.P. (Con)— concluyó que “el programa de asistencia militar de Estados Unidos debería empezar a condicionar su apoyo más directamente al respeto a los derechos humanos. A través de su programa de ayuda, Estados Unidos tiene una oportunidad para promover el proceso de paz y apoyar a los elementos moderados dentro del gobierno de Cristiani”.

Hoy quisiéramos reafirmar esta declaración. Creemos que ha llegado un momento crucial para enviar señales correctas a la Fuerza Armada de El Salvador. Más ayuda militar sin condiciones servirá únicamente para promover mayores abusos de los derechos humanos, y por lo tanto la polarización de El Salvador.

Esperamos que Uds. aumenten las condiciones impuestas sobre la ayuda militar. Si no podemos contar con este apoyo inmediato de parte suya, el proceso de paz mediado por las Naciones Unidas no tiene perspectivas de éxito.

Atentamente,

(firman 48 miembros
del Parlamento Británico)

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e Internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

| | |
|------------------------|---------|
| El Salvador | |
| personal | €50.00 |
| correo | €60.00 |
| Centroamérica y Panamá | \$25.00 |
| Norte y Sur América | \$35.00 |
| Europa | \$40.00 |
| Otras regiones | \$45.00 |

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ext. 161 y 191.